



## Consejo de Seguridad

Distr. general  
26 de diciembre de 2002  
Español  
Original: inglés

---

### **Carta de fecha 24 de diciembre de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo**

Le escribo en relación con mi carta de 12 de septiembre de 2002 (S/2002/1009).

El Comité contra el Terrorismo ha recibido el informe complementario adjunto presentado por el Principado de Mónaco de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo).

Le agradecería que hiciese distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

*(Firmado)* Jeremy **Greenstock**  
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad  
establecido en virtud de la resolución 1373 (2001)  
relativa a la lucha contra el terrorismo



**Anexo**

[Original: francés]

**Nota verbal de fecha 23 de diciembre de 2002 dirigida al  
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido  
en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha  
contra el terrorismo por la Misión Permanente de Mónaco  
ante las Naciones Unidas**

El Representante Permanente del Principado de Mónaco ante las Naciones Unidas saluda atentamente al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001), de 28 de septiembre de 2001, relativa a la lucha contra el terrorismo, y tiene el honor de transmitirle el informe complementario adjunto del Principado de Mónaco según se le ha solicitado en el párrafo 6 de la resolución susodicha (véase el apéndice adjunto).

## Apéndice

[Original: francés]

### Principado de Mónaco

#### **Informe complementario presentado al Comité contra el Terrorismo en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas**

El Consejo de Seguridad,

...

Actuando en virtud del Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas,

...

6. Decide establecer, de conformidad con el artículo 28 de su reglamento provisional, un Comité del Consejo de Seguridad integrado por todos los miembros del Consejo, para verificar la aplicación de la presente resolución, con la asistencia de los expertos que se consideren apropiados, y exhorta a todos los Estados a que informen al Comité, a más tardar 90 días después de la fecha de aprobación de la resolución y con posterioridad conforme a un calendario que será propuesto por el Comité, de las medidas que hayan adoptado para aplicar la presente resolución.

*Nota:* El presente informe se ha redactado siguiendo las directrices enunciadas en las notas Nos. SCA/20/01(6) y S/AC.40/2002/MS/OC.147 del Comité contra el Terrorismo.

Principado de Mónaco (2 de diciembre de 2002)

## I. Medidas adoptadas en aplicación del párrafo 1 de la resolución 1373

### Párrafo 1, apartado a) de la resolución 1373

*“El Consejo de Seguridad,*

*...*

1. *Decide* que todos los Estados:

a) *Previengan y repriman la financiación de los actos de terrorismo;”*

1. *Aparte de los bancos, ¿tienen las personas físicas o jurídicas (por ejemplo, los abogados y notarios) la obligación de informar a las autoridades públicas sobre transacciones sospechosas que podrían estar relacionadas con actividades terroristas? En caso afirmativo, ¿qué sanciones se aplican a las personas que, conscientemente o por negligencia, no informan a las autoridades?*

Como se indicó en el informe inicial, se presentó al Consejo Nacional (Parlamento monegasco) un proyecto de ley por el que se enmendaba la Ley 1.162, de 7 de julio de 1993, relativa a la participación de los organismos financieros en la lucha contra el blanqueo de capitales, con objeto de implantar la obligación de declarar sospechosas las transacciones vinculadas al terrorismo, así como las operaciones que podrían provenir de actividades de la delincuencia organizada. Así pues, la Ley No. 1.253, de 12 de julio de 2002, modificó ese texto, que se titula ahora “Ley No. 1.162, de 7 de julio de 1993, relativa a la participación de los organismos financieros en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo” (véase el anexo 1).

A continuación se indican las personas físicas o jurídicas sujetas a lo dispuesto en la Ley:

#### *Artículo 1*

- Las personas que habitualmente realizan operaciones bancarias o de intermediación bancaria;
- Los servicios financieros de Correos;
- Las compañías de seguros mencionadas en el artículo 3 de la orden No. 4.178, de 12 de diciembre de 1968, relativa al establecimiento del control estatal sobre las compañías de seguros de todo tipo y de capitalización y a la organización del sector de seguros;
- Los agentes de cambio;
- Las sociedades que ejercen las actividades mencionadas en el artículo 1 de la ley No. 1.194, de 9 de julio de 1997, relativa a la gestión de carteras y a las actividades bursátiles conexas;
- Las personas que figuran en la lista indicada en el artículo 3 de la Ley No. 214, de 27 de febrero de 1936, enmendada, y las que realizan operaciones de gestión y administración de personas jurídicas extranjeras. Estas dos últimas están sujetas a partir de ahora a las mismas obligaciones que los establecimientos bancarios.

*Artículo 2*

- Los abogados, salvo en el caso de que hayan adquirido información relativa a operaciones que entrañan movimientos de capitales en el ejercicio de la defensa.

*Artículo 2 y Soberana Orden No. 14.466 de 22 de abril de 2002*

- Los interventores de cuentas, los peritos en contabilidad, los contables y los síndicos de quiebras;
- Los asesores jurídicos y financieros;
- Los corredores de comercio y los corredores de fincas;
- Los agentes de la propiedad inmobiliaria;
- Los transportistas de fondos;
- Los comerciantes y las personas que organizan la venta de piedras preciosas, materiales preciosos, antigüedades, obras de arte y otros objetos de gran valor.

*Artículo 19*

- Los notarios;
- Los secretarios judiciales.

*Artículo 25*

- Los casinos y las casas de juego (cuyas obligaciones se ven aumentadas: identificación de todos los clientes que compren o canjeen placas o fichas por la suma de 15.000 euros o más para juegos de mesa y 1.500 euros para las máquinas tragaperras; establecimiento de procedimientos internos escritos para comunicar al Servicio de Información y Fiscalización de los Circuitos Financieros (SICCFIN)).

Con arreglo al artículo 3 de la Ley No. 1.162 enmendada, todos los profesionales antes mencionados tienen obligación de declarar:

- “todas las sumas registradas en sus libros y todas las transacciones de fondos que pudieran proceder del tráfico de estupefacientes o de actividades de la delincuencia organizada y los hechos que constituyen los indicios en los que se basan para efectuar su declaración;
- todas las sumas registradas en sus libros y todas las transacciones de fondos que pudieran estar vinculados al terrorismo, a actos de terrorismo o a organizaciones terroristas o que estén destinados a utilizarse para financiar estas últimas y los hechos que constituyen los indicios en los que se basan para efectuar su declaración.”

El incumplimiento de la Ley No. 1.162 enmendada acarrea sanciones administrativas y penales, sobre todo en caso de omisión de la declaración de sospecha en relación con las transacciones vinculadas al terrorismo:

- **Sanciones administrativas:** Los artículos 18 y 21 de la Ley susodicha sancionan el incumplimiento de las obligaciones enunciadas en dicha Ley que incumben a las personas antes mencionadas con la notificación, la censura, la prohibición de efectuar determinadas operaciones o la inhabilitación;

Por otra parte, en general, a toda persona física o jurídica que requiera autorización previa para ejercer cualquier actividad en el Principado de Mónaco se le puede retirar dicha autorización con arreglo a la Ley No. 1.144, de 26 de julio de 1991, relativa al ejercicio de determinadas actividades económicas y jurídicas (artículo 9, 5º), o a la Ley No. 767, de 8 de julio de 1964, relativa a la revocación de las autorizaciones de constitución de sociedades anónimas y en comandita por acciones (artículo 1, 5º).

- **Sanciones penales:** El artículo 32 de la Ley 1.162 enmendada estipula que se castigará el incumplimiento de la obligación de declarar con la multa prevista en el epígrafe 3 del artículo 26 del Código Penal (de 9.000 a 18.000 euros): “quien contravenga lo dispuesto en los artículos 3, 5, 19 y 25 por desconocimiento manifiesto de sus obligaciones profesionales de diligencia previstas en la presente ley y sus reglamentos”.

Por otra parte, el artículo 29 estipula lo siguiente: “A quien obstaculice o intente obstaculizar la fiscalización ejercida en virtud del artículo 26 [en el que se definen las modalidades de fiscalización que ejercen los agentes del SICCFIN] se le podrá imponer una pena de un mes a seis meses de prisión y la multa prevista en el epígrafe 2 del artículo 26 del Código Penal o una de esas dos penas únicamente”.

Por último, la Soberana Orden 15.320, de 8 de abril de 2002 (véase el anexo 2), relativa a la represión de la financiación del terrorismo, establece asimismo sanciones penales para las personas físicas o jurídicas que suministren, recauden o administren, por cualesquiera medios, directa o indirectamente, fondos con intención de que se utilicen, o a sabiendas de que se utilizarán, para perpetrar actos de terrorismo (véase la respuesta relativa al párrafo 1, apartado b)). No hacer voluntariamente las declaraciones obligatorias puede constituir un delito de complicidad en un acto de financiación del terrorismo. En ese caso, las personas físicas cómplices podrán ser castigadas con penas de 5 a 10 años de prisión (artículo 5). Las personas jurídicas incurrirán asimismo, cuando hayan obrado por cuenta propia, en responsabilidad penal: con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, se les podrá imponer la multa prevista en el epígrafe 4 del artículo 26 del Código Penal (18.000 a 90.000 euros), multa que podrá aumentarse hasta el monto de los fondos efectivamente suministrados o recaudados. A las personas jurídicas se les podrá imponer igualmente la retirada de autorización administrativa.

2. *El Comité contra el Terrorismo desearía saber los resultados del examen de la “legislación nacional para garantizar el libre intercambio de informaciones concretamente en relación con la financiación de actividades terroristas”. ¿Se refiere ese examen al libre intercambio de información entre las autoridades monegascas o con otros Estados?*

Las enmiendas introducidas en la Ley No. 1.162 han permitido facilitar el intercambio de información tanto en el Principado como con las autoridades estatales extranjeras:

- En primer lugar, se han extendido las obligaciones de la Ley No. 1.162 enmendada a un mayor número de profesionales (las personas mencionadas en los artículos 1, 20 y 25). Asimismo, el artículo 28 de la Ley No. 1.162 enmendada permite al SICCFIN recibir información útil, además del Procurador General,

“de las autoridades de fiscalización y de los servicios estatales”. Las personas indicadas en la respuesta a la pregunta anterior tienen obligación de declarar las transacciones de fondos que podrían proceder del tráfico de estupefacientes o de actividades de la delincuencia organizada y los hechos que constituyen los indicios en los que se basan para efectuar su declaración. Asimismo tienen obligación de declarar los fondos que pudieran estar vinculados al terrorismo, a actos de terrorismo o a organizaciones terroristas o que estén destinados a utilizarse para financiar estas últimas y los hechos que constituyen los indicios en los que se basan para efectuar su declaración.

Por la Soberana Orden 15.530, de 27 de septiembre de 2002 (véase el anexo 5), se constituyó un comité de coordinación entre los distintos servicios administrativos que ejercen la función de fiscalización de las actividades financieras. La función de ese comité, que se reúne como mínimo cuatro veces al año, consiste en organizar el intercambio de información entre los servicios encargados de fiscalizar las actividades de los bancos de inversión, de seguros, de gestión y de administración de entidades extranjeras y de tratar todas las cuestiones de interés común relacionadas con la coordinación de la fiscalización de las actividades mencionadas.

A ese comité, que preside el Consejero del Gobierno para las Finanzas y la Economía, puede sumarse cualquier representante de servicios administrativos o cualquier persona calificada.

- En segundo lugar, el intercambio de información con las autoridades extranjeras en virtud del artículo 31 se refiere igualmente, además de al tráfico de estupefacientes y a las actividades de la delincuencia organizada, a “la información relativa a las transacciones que parezcan estar vinculadas al terrorismo, a actos de terrorismo o a organizaciones terroristas o a la financiación de estas últimas”.

Del mismo modo, con arreglo a la Soberana Orden No. 11.246, de 12 de abril de 1994, enmendada, el SICCFIN puede, bajo la condición de reciprocidad, recibir de un organismo de supervisión extranjero y comunicar a éste la información obtenida de organismos financieros establecidos en el Principado sobre los procedimientos internos de lucha contra el blanqueo de capitales, a condición de que dicho organismo de supervisión esté obligado a guardar el secreto profesional con garantías equivalentes a las que otorga a los organismos financieros el SICCFIN.

Asimismo, se ha redactado el artículo 17 de La ley No. 1.162 enmendada de forma que los documentos relativos a la identidad de los clientes y a las transacciones efectuadas puedan ser utilizados con objeto de informar, en las condiciones previstas en el artículo 31, a los servicios extranjeros que ejerzan competencias análogas.

3. *El Comité contra el Terrorismo desearía recibir un informe sobre la aprobación de las enmiendas a la Ley No. 1.162, de 7 de julio de 1993, y a la Soberana Orden No. 11.246, de 12 de abril de 1994, de las que se hace mención en el informe.*

Como se indicó en la primera respuesta, el proyecto de ley que modifica la Ley No. 1.162 de 7 de julio de 1993, fue aprobado por el Consejo Nacional el 24 de junio de 2002. Esa ley de enmienda fue publicada en el Boletín Oficial de Mónaco el 19 de julio de 2002 con el No. 1.253, de 12 de julio de 2002 (véanse los anexos 1

y 1 *bis* en los que se vuelve a transcribir la Ley No. 1.162 modificada por la Ley No. 1.162). Por otra parte, en virtud de la Soberana Orden No. 15.454, de 8 de agosto de 2002, se enmendó la Soberana Orden No. 11.246, de 12 de abril de 1994, por la que se creó el Servicio de Información y Fiscalización de los Circuitos Financieros (SICCFIN): el propósito fundamental de esa enmienda era otorgar competencia a ese organismo para desempeñar las nuevas funciones definidas en la Ley No. 1.162 enmendada (véase esta respuesta con detalle y el anexo 4).

Inicialmente, la Ley No. 1.162, de 7 de julio de 1993, relativa a la participación de los organismos financieros en la lucha contra el blanqueo de capitales, fue la respuesta a la ratificación por Mónaco de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y de Sustancias Sicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, y manifestaba la voluntad de asociarse a los trabajos del Grupo Especial de Expertos Financieros sobre el blanqueo de capitales (GAFI); tenía por objeto en particular luchar contra el blanqueo de capitales provenientes del tráfico de estupefacientes y de las actividades de organizaciones delictivas.

Esa ley se amplió para tomar en cuenta, a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, las recomendaciones y decisiones de instituciones internacionales (en particular, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el GAFI) por las que se invitaba a los Estados a incorporar a su legislación interna medidas de lucha contra el terrorismo y su financiación.

Así pues, se introdujo la lucha contra la financiación del terrorismo en el texto de la Ley No. 1.162. Los organismos financieros y las personas sujetas a la ley mencionada tienen obligación de declarar las sumas y los hechos que constituyan indicios de operaciones provenientes del tráfico de estupefacientes o de actividades de la delincuencia organizada o que estuvieran vinculadas al terrorismo, a actos de terrorismo o a organizaciones terroristas o destinados a ser utilizados para la financiación del terrorismo (artículos 3, 19 y 25).

Se introdujo una disposición concreta relativa a la declaración de sospecha respecto de “las transacciones registradas o realizadas en un Estado o en un territorio cuya legislación se reconozca insuficiente o cuyas prácticas se considere que obstaculizan la lucha contra el blanqueo de capitales por una institución internacional de concertación y de coordinación competente”.

En ese sentido, se había enviado ya una directiva de fecha 11 de abril de 2002 a los bancos y establecimientos financieros sobre la obligación de declarar sospechosas las transacciones financieras y las personas vinculadas a Nauru.

El objeto de un nuevo artículo 10 *bis*, preparado en respuesta a las ocho recomendaciones del GAFI de 31 de octubre de 2001, es tener en cuenta los medios modernos de transferencia de fondos, a saber, los giros electrónicos, a fin de asegurar la supervisión de esas transacciones.

Conforme a las recomendaciones de las instituciones internacionales, se prevé la mayor asistencia posible en el marco de las indagaciones, investigaciones o procedimientos. El SICCFIN mantiene una serie de acuerdos con dependencias de información financiera extranjeras (para más detalles, véase la respuesta relativa al apartado f) del párrafo 2).

Se amplió el artículo 26 de la Ley No. 1.162 enmendada, que otorga competencia al SICCFIN en cuestiones de fiscalización: indica que las modalidades de fiscalización



se precisan en la Soberana Orden No. 15.454, de 8 de agosto de 2000, antes mencionada, que otorga competencia al SICCFIN para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley y de las medidas de aplicación para su ejecución, así como para inspeccionar las pruebas in situ sin que se pueda invocar el secreto profesional.

**Párrafo 1, apartado b) de la resolución 1373**

*“El Consejo de Seguridad,*

...

1. *Decide* que todos los Estados:

...

b) Tipifiquen como delito la provisión o recaudación intencionales, por cualesquiera medios, directa o indirectamente, de fondos por sus nacionales o en sus territorios con intención de que dichos fondos se utilicen, o con conocimiento de que dichos fondos se utilizarán, para perpetrar actos de terrorismo;”

*Sírvase hacer llegar al Comité contra el Terrorismo un informe provisional sobre la tipificación como delito de la financiación del terrorismo en el Principado de Mónaco.*

Tras la entrada en vigor del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo el 10 de abril de 2002, las autoridades monegascas publicaron en el Boletín Oficial de Mónaco del 12 de abril de 2002 las Soberanas Órdenes por las que se incorporaban al derecho interno las disposiciones de ese instrumento internacional y se aplicaban las recomendaciones específicas del GAFI y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En la Soberana Orden No. 15.320, de 8 de abril de 2002, relativa a la represión de la financiación del terrorismo (véase el anexo 2), promulgada en aplicación del artículo 2 del Convenio antes mencionado, se tipifican los delitos y se establecen las penas correspondientes a los actos de financiación del terrorismo. Por acto de financiación del terrorismo se entiende el que tiene por objeto facilitar, recaudar o administrar fondos, por cualquier medio y de forma directa o indirecta, con intención de que se utilicen o a sabiendas de que se utilizarán para cometer uno de los actos contemplados en los distintos convenios y convenciones sectoriales de lucha contra el terrorismo que guardan relación con el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (los relativos a la aviación civil y la navegación marítima internacionales, los materiales nucleares, los atentados cometidos con bombas y la toma de rehenes) o cualquier otro acto destinado a causar la muerte o heridas graves a civiles u otras personas que no participen directamente en las hostilidades de un conflicto armado, cuando, por su carácter o su contexto, dicho acto tenga por objeto intimidar a una población o coaccionar a un gobierno.

En ese texto se establecen penas de 5 a 10 años de prisión para los culpables de uno o más actos de financiación del terrorismo. La complicidad y la tentativa se castigan con las mismas penas. Las personas jurídicas de Mónaco (salvo el Estado, el Ayuntamiento y las instituciones públicas) tienen responsabilidad penal respecto de los actos de financiación del terrorismo y, si se determina dicha responsabilidad, se les imponen multas de entre 18.000 y 90.000 euros. Además, pueden quedar

inhabilitadas por orden ministerial para ejercer funciones administrativas en el Principado.

**Párrafo 1, apartado c) de la resolución 1373**

*“El Consejo de Seguridad,*

...

1. *Decide* que todos los Estados:

...

c) Congelen sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión; de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, inclusive los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas y de las personas y entidades asociadas con ellos;”

*N.B:* Conviene distinguir entre la congelación de fondos determinada en virtud de la Soberana Orden No. 15.321, de 8 de abril de 2002, relativa a los procedimientos de congelación de fondos para la lucha contra el terrorismo (véase la pregunta 3) y la posibilidad de que el SICCFIN retenga los fondos en virtud del artículo 4 de la Ley No. 1.162 enmendada (véase la pregunta 1).

1. *¿Es suficiente el plazo de 12 horas a los fines de emitir una resolución judicial sobre la decisión del Servicio de Información y Fiscalización de los Circuitos Financieros (SICCFIN)?*

Cuando el SICCFIN recibe una declaración de sospecha en el marco de la Ley No. 1.162 de 7 de julio de 1993, enmendada, puede, en aplicación del artículo 4 de ese texto, retener los fondos sospechosos por un plazo de 12 horas. El objetivo es conseguir en el plazo más breve una decisión judicial (embargo judicial) para prorrogar el embargo dictado provisionalmente por el SICCFIN.

Teniendo en cuenta las relaciones muy estrechas que existen con las instituciones financieras y las autoridades judiciales<sup>1</sup>, ese plazo es suficiente para lograr el objetivo propuesto. De hecho, el SICCFIN tiene representantes en los bancos y las instituciones financieras, por lo que es posible contactarlos y llegar a un acuerdo con ellos muy rápidamente. Lo mismo ocurre con las autoridades judiciales, por lo que es posible observar el plazo fijado por la Ley.

2. *¿En qué condiciones se puede tomar la decisión de imponer un embargo judicial? ¿Es posible apelar tal decisión? ¿Cuáles son los efectos jurídicos de un recurso contra un embargo judicial?*

Según el procedimiento detallado en la pregunta 1 *supra*, cuando el SICCFIN efectúa un embargo administrativo, ese servicio debe, antes de que transcurra el plazo de 12 horas, presentar a las autoridades judiciales una petición de embargo

<sup>1</sup> Cabe recordar que el Principado de Mónaco es un Estado pequeño en el que las estructuras administrativa y judicial tienen una “dimensión humana”, lo que ayuda a una transmisión rápida y eficaz de la documentación entre los distintos servicios interesados.

judicial. En la práctica, el SICCFIN formula la petición al Procurador General, quien solicita al Presidente del Tribunal de Primera Instancia una orden de embargo, decisión que se pone inmediatamente en conocimiento del establecimiento bancario al que afecta la orden.

La mayor parte de las veces, el embargo judicial va acompañado de una apertura de instrucción por el Ministerio Fiscal. Entonces, el juez de instrucción puede ordenar la congelación de los fondos sospechosos (artículos 87 y 100 a 106 del Código de Procedimiento Penal): el juez puede, en particular, “embargar o disponer el embargo de todos los objetos que puedan servir de prueba, los cuales se sellan después de hacerse inventario de ellos” (artículo 100 del Código de Procedimiento Penal). “Si el embargo afecta a dinero en efectivo, lingotes, efectos o valores cuya conservación en especie no se considera necesaria para probar los hechos o para salvaguardar los derechos de las partes o de terceros, el juez de instrucción puede autorizar al secretario judicial a que los deposite en la depositaria general” (artículo 104 del Código de Procedimiento Penal).

Durante el período de instrucción es posible apelar esa decisión del juez: el inculcado o cualquier persona que alegue tener derecho sobre los fondos embargados puede, antes de que se cierre la instrucción, reclamar la restitución de los fondos al juez de instrucción (artículo 105 del Código de Procedimiento Penal). En caso de que el juez se niegue, es posible apelar ante la Cámara del Consejo de la Corte de Apelación, mediante una simple petición, en los diez días siguientes a la notificación a los interesados.

En el marco de un proceso, las disposiciones del Código Penal permiten al juez confiscar los fondos que hayan servido o estén destinados a la comisión de un delito vinculado al terrorismo o que son producto de un delito (artículos 12 y 32) y prevén asimismo la confiscación de los bienes y capitales de origen ilícito, en particular los que sean producto de un delito de financiación del terrorismo, de un acto de terrorismo o de una organización terrorista. La Soberana Orden No. 15.320 sobre la represión de la financiación del terrorismo obliga igualmente a confiscar los fondos utilizados para financiar el terrorismo, un acto de terrorismo o a una organización terrorista o que sean producto de esos delitos (artículo 10).

3. *Sírvase presentar al Comité contra el Terrorismo un informe provisional sobre el proyecto de Soberana Orden cuyo objeto es dar efecto a los apartados c) y d) del párrafo 1 de la resolución.*

La Soberana Orden No. 15.321, de 8 de abril de 2002, relativa a los procedimientos de congelación de fondos para la lucha contra el terrorismo (véase el anexo 3), promulgada en aplicación del artículo 8 del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establece las modalidades de aplicación de los procedimientos de congelación de fondos. En particular, en ese texto:

- Se define el concepto de congelación de fondos, que consiste en impedir todo movimiento, modificación, utilización o manipulación de dichos fondos (artículo 2);
- Se establece la obligación de que las instituciones crediticias y financieras, las compañías de seguros y demás organismos, entidades o personas, congelen los fondos de los que sean titulares o se hallen en posesión las personas físicas o

jurídicas, las entidades o los organismos indicados en una orden ministerial (artículo 1);

- Se imponen prohibiciones complementarias, como la de poner los fondos congelados a disposición de las personas indicadas en la orden ministerial, prestar servicios a dichas personas o realizar operaciones que permitan eludir los procedimientos de congelación o participar en ellas (artículo 3);
- Se establecen sanciones penales aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones mencionadas (de 18.000 a 90.000 euros) (artículo 7).

Después de la publicación de la Soberana Orden No. 15.321, se publicaron tres órdenes ministeriales (No. 2002-222, de 9 de abril de 2002, No. 2002-434, de 16 de julio de 2002, No. 2002-581, de 11 de octubre de 2002) relativas a la aplicación de esa Soberana Orden. En ellas se determinan las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos cuyos fondos deben ser congelados. En esas listas se incluye a las mismas personas y entidades que figuran en las listas elaboradas por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) en aplicación de las resoluciones 1267 (2000), 1333 (2000) y 1390 (2002) cuya actualización se comunica periódicamente, así como en las listas elaboradas en aplicación de los reglamentos de la Comisión y de las decisiones del Consejo de la Unión Europea. Las listas que se preparen en el futuro en virtud de órdenes ministeriales serán modificadas o ampliadas en función de las decisiones adoptadas por esas instancias internacionales.

4. *¿Qué tipo de información están obligados los bancos y otros establecimientos financieros a proporcionar a las autoridades monegascas? ¿Qué penas prevé la ley para castigar el incumplimiento de la obligación de declarar y, en su caso, qué penas se han aplicado?*

El objetivo del SICCFIN consiste en recoger, procesar y difundir la información sobre los circuitos financieros de blanqueo de capitales, conforme a la definición del Grupo Egmont al que pertenece desde 1995, e igualmente puede, conforme al artículo 17, informar en las condiciones previstas en el artículo 31 a los servicios extranjeros que ejerzan competencias análogas.

Cuando un banco o un establecimiento financiero formula una declaración de sospecha al SICCFIN, debe indicar en ella los motivos de sospecha, precisar la suma de que se trata y la índole de los fondos, describir las operaciones litigiosas (documentos de apoyo) y el trasfondo económico de la transacción y suministrar los elementos de conocimiento de sus clientes (ficha del cliente), así como los extractos de cuentas (artículos 3, 5 y 17 de la Ley No. 1.162 enmendada – véase la respuesta en relación con el párrafo 1, apartado a), pregunta 2).

El incumplimiento de la obligación de formular la declaración de sospecha definida en el artículo 32 de la Ley No. 1.162 enmendada se sanciona con una multa prevista en el epígrafe 3 del artículo 26 del Código Penal (de 9.000 a 18.000 euros). El incumplimiento de la obligación de vigilancia acarrea, al igual que en el caso de la declaración de sospecha, tanto sanciones administrativas (tres advertencias previas) como sanciones penales ya aplicadas.

El SICCFIN transmitió a los bancos y a los establecimientos financieros directrices relativas al aumento de la vigilancia en la aplicación del conjunto de disposiciones legislativas y reglamentarias, recientemente reforzadas, relativas a la lucha

contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, muy especialmente para la identificación y el conocimiento de las personas que figuran en las listas relativas al terrorismo y la descripción recomendada al SICCFIN.

Por otra parte, como ya se ha mencionado en la pregunta 3 *supra*, la Soberana Orden No. 15.321 impone a las instituciones crediticias y financieras, las compañías de seguros y demás organismos, entidades o personas, la obligación de proporcionar al Director del Presupuesto y el Tesoro toda la información necesaria para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esa orden (artículo 4). En virtud de lo dispuesto en el artículo 7, el incumplimiento de esa obligación acarrea la imposición de las multas previstas en el epígrafe 4 del artículo 26 del Código Penal (de 18.000 a 90.000 euros).

5. *¿Puede Mónaco congelar los fondos tanto de residentes como de no residentes en virtud de la Soberana Orden promulgada para llevar a efecto el apartado c) del párrafo 1 de la resolución?*

Sí: el artículo 1 de la Soberana Orden No. 15.321 no impone ninguna condición de residencia. Basta que los fondos (en el sentido del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo) estén depositados o hayan sido objeto de una transacción en el Principado de Mónaco, independientemente del lugar de residencia de sus propietarios.

6. *Además de las penas establecidas en el epígrafe 4 del artículo 26 del Código Penal, ¿tiene Mónaco la intención de imponer directamente obligaciones o sanciones a las personas culpables de no haber observado un procedimiento de congelación de activos?*

No observar los procedimientos de congelación puede constituir delito de financiación del terrorismo en el sentido del artículo 2, apartado 1, de la Soberana Orden No. 15.320, relativa a la represión de la financiación del terrorismo, que sanciona el hecho de reunir o administrar fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que se utilizarán, para cometer un acto de terrorismo.

En ese caso, la Orden prevé la imposición a las personas físicas de penas de cinco a diez años de prisión en caso de financiación, tentativa de financiación o complicidad en ella, o de participación en la comisión de un acto de financiación (artículos 4, 5, 6 y 7 – véase la respuesta relativa al párrafo 1, apartado b)).

7. *¿Qué criterios se siguen para añadir nombres a la lista de personas y entidades sospechosas de terrorismo determinada por orden ministerial o para retirar nombres de esa lista?*

Como ya se indicó en detalle en la respuesta 3 *supra*, en las listas de personas físicas o jurídicas determinadas por orden ministerial, de conformidad con el artículo 1 de la Soberana Orden No. 15.321 que se han elaborado hasta ahora figuran las mismas personas y entidades de las listas elaboradas por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) en aplicación de las resoluciones 1267 (2000), 1333 (2000) y 1390 (2002), que fueron transcritas de nuevo en los reglamentos de la Comisión Europea. Toda nueva lista publicada por un Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en relación con la congelación de fondos destinados a actividades terroristas o vinculados al terrorismo o por un reglamento o una decisión de la Unión Europea daría lugar a la promulgación

de una nueva orden ministerial por el Ministro de Estado. En ese sentido, las personas y entidades que figuran en la decisión del Consejo de 17 de junio de 2002 (2002/460/CE), y en la de 28 de octubre de 2002 (2002/848/CE), en aplicación del artículo 2 del reglamento (CE) No. 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, figuran también en las órdenes ministeriales de Mónaco.

**Párrafo 1, apartado d) de la resolución 1373**

*“El Consejo de Seguridad,*

*...*

1. *Decide* que todos los Estados:

*...*

d) Prohíban a sus nacionales o a todas las personas y entidades en sus territorios que pongan cualesquiera fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos de otra índole, directa o indirectamente, a disposición de las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo o faciliten su comisión o participen en ella, de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas o bajo sus órdenes;”

*¿De qué manera permite garantizar el sistema de control financiero que los fondos recibidos por asociaciones no se sean desviados para llevar a cabo actividades terroristas?*

La Ley No. 885, de 29 de mayo de 1970, relativa al control financiero de los organismos de derecho privado que reciben una subvención del Estado, prevé el control de las autoridades monegascas cuando las asociaciones, fundaciones y demás organismos de derecho privado sean subvencionados por el Estado. Este control financiero, muy estricto, lo efectúan agentes estatales pertenecientes al Servicio de Fiscalización de las Finanzas (Control General de los Gastos). El servicio goza de los poderes de investigación necesarios para el examen de las pruebas y las escrituras, el balance y las cuentas anuales. Puede pedir al organismo de que se trate cualquier explicación o justificación que considere necesarias.

Un proyecto de ley en curso relativo a las asociaciones y federaciones impone a las agrupaciones que decida la administración monegasca la obligación de presentar anualmente al Ministro de Estado un informe completo sobre sus actividades y su contabilidad.

**II. Medidas adoptadas en aplicación del párrafo 2 de la resolución 1373**

**Párrafo 2 a) de la resolución 1373**

*“El Consejo de Seguridad,*

*...*

2. *Decide también* que todos los Estados:

a) Se abstengan de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas que participen en la comisión de actos de terrorismo,

incluso reprimiendo el reclutamiento de miembros de grupos terroristas y eliminando el abastecimiento de armas a los terroristas;”

1. *Sírvase explicar cómo está sancionado el reclutamiento de miembros de grupos terroristas dentro y fuera del territorio de Mónaco, en comparación con la pertenencia a un grupo terrorista.*

El hecho de que una persona reclute miembros de una asociación con fines delictivos, como un grupo terrorista, se asimila a la participación en el delito y está sancionado como tal en los artículos 209 a 211 del Código Penal (10 a 20 años de reclusión).

El mismo tipo de acto cometido fuera del Principado puede dar lugar a un proceso por complicidad en la pertenencia a un grupo terrorista, que entraña las mismas penas que las previstas para el delito principal (artículos 41 y 42 del Código Penal).

2. *¿Qué penas son aplicables en caso de adquisición de armas de fuego sin autorización?*

Según el artículo 20 de la Ley No. 913, de 18 de junio de 1971, relativa a las armas y municiones, la adquisición de armas de fuego sin autorización está sancionada con una pena de reclusión de seis meses a tres años y una multa de 9.000 a 18.000 euros.

Además, si el culpable ha sido condenado anteriormente a reclusión o a una pena más grave en razón de un crimen o delito, la pena de reclusión será de uno a cinco años.

Por último el tribunal decreta sistemáticamente la confiscación de las armas o municiones adquiridas sin autorización.

3. *Sírvase describir las medidas de índole legislativa y práctica que apunten a impedir que una entidad o un individuo recluten a otras personas, recauden fondos o movilicen cualquier otra forma de apoyo a actividades terroristas realizadas dentro o fuera del territorio de Mónaco, en particular:*

- *El reclutamiento, la recaudación de fondos o la movilización de otras formas de ayuda a otros países, dentro o fuera del territorio de Mónaco;*
- *Las actividades engañosas, como la de reclutar a alguien diciéndole que se hace con un objetivo (la enseñanza, por ejemplo) distinto del verdadero y la de recaudar fondos mediante organizaciones de fachada.*

Las medidas legislativas vigentes en Mónaco para reprimir el reclutamiento de personas a fin de hacerlas participar en actividades terroristas son las dispuestas, al igual que la mencionada respecto de la pregunta 1, en los artículos 209 a 211 del Código Penal.

Igualmente, las medidas destinadas a reprimir la recaudación de fondos para actividades terroristas son objeto de la Ordenanza Soberana No. 15.320, sobre la represión de la financiación del terrorismo (véase la respuesta relativa al párrafo 1 b)).

Hay otras disposiciones del Código Penal que permiten a las autoridades judiciales procesar y sancionar con penas de reclusión a quienes recauden fraudulentamente fondos para perpetrar actos terroristas:

- El artículo 323 sanciona en particular la extorsión:

“Quien obtenga mediante fuerza, violencia o coacción la entrega de fondos o valores, la firma o la emisión de un documento, acta, valor o pieza que contenga o imponga una obligación de hacer, la enajenación de un bien o el cumplimiento de una obligación será sancionado con una pena de 10 a 20 años de reclusión.

Quien mediante la amenaza escrita o verbal de hacer revelaciones o denuncias difamatorias obtenga o trate de obtener la entrega de fondos o valores o la firma o entrega de uno de los documentos antes enumerados será sancionado con pena de reclusión de uno a cinco años y con la multa prevista en el párrafo 4 del artículo 26 (18.000 a 90.000 euros)”.

- El artículo 330 sanciona por su parte el fraude, que corresponde en cierta forma a las “actividades engañosas, como la de reclutar a alguien diciéndole que se hace con un objetivo (la enseñanza, por ejemplo) distinto del verdadero y la de recaudar fondos mediante organizaciones de fachada”.

Según este artículo “*Quien, usando un nombre o título falso o haciendo maniobras fraudulentas para convencer a otro de la existencia de falsas empresas o facultades o créditos imaginarios para suscitar la esperanza o el temor de que ocurra un suceso, un accidente u otro acontecimiento quimérico, se haga entregar o trate de hacerse entregar fondos, bienes muebles, efectos, dineros, mercancías, pagarés, promesas, recibos de pago o cualquier otro documento que contenga o imponga una obligación o carga y haya tratado por uno de estos medios de privar fraudulentamente a otro de su fortuna en todo o parte será sancionado con una pena de reclusión de uno a cinco años y con la multa prevista en el párrafo 4 del artículo 26 (18.000 a 90.000 euros)*”.

Por último, según la Ley No. 590, de 21 de junio de 1994, que rige las suscripciones públicas, los llamamientos a la generosidad pública para recaudar fondos en beneficio de una determinada actividad deben contar con la autorización previa de las autoridades de Mónaco. Según este texto, la entidad que haya recibido esa autorización está obligada a comunicar a la Administración información acerca del monto recaudado, su objetivo y su lugar de destino.

Desde un punto de vista práctico, cabe indicar que los servicios de policía y judicial tienen como cometido hacer respetar la ley en cuanto al reclutamiento, la recaudación de fondos o cualquier otro tipo de ayuda a las actividades terroristas. Se trata de normas generales aplicables a todos los delitos y no únicamente a los vinculados al terrorismo.

#### **Párrafo 2 b) de la resolución 1373**

*“El Consejo de Seguridad,*

...

2. *Decide también* que todos los Estados:

...

b) Adopten las medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, incluso dando alerta temprana a otros Estados mediante el intercambio de información;”



*Sírvase proporcionar al Comité información acerca del mecanismo de cooperación entre las autoridades encargadas de la fiscalización de drogas, la vigilancia financiera y la seguridad, especialmente en lo que toca a los controles fronterizos para impedir los desplazamientos de terroristas.*

Antes de presentar la información solicitada, hay que indicar nuevamente que el Principado de Mónaco es un Estado pequeño, totalmente urbanizado, con una superficie de 2 kilómetros cuadrados y 32.000 habitantes. Por ello, existe en Mónaco un solo organismo de policía, la Sûreté Publique, competente en materia de drogas, delitos financieros y seguridad. A diferencia de lo que ocurre en algunos países grandes, no hay en Mónaco organismos especializados y no se plantean los problemas de cooperación a que puede dar lugar su existencia.

En cuanto a las medidas de control fronterizo, y para complementar la información presentada en el informe inicial (observación relativa al párrafo 2 g)), en que se indicaba en particular que el control en las fronteras aéreas y marítimas está conjuntamente a cargo de los servicios de policía de Mónaco y de los servicios de aduana de Francia en el marco de los Acuerdos Europeos de Schengen y de convenios entre los dos países, cabe señalar que el Principado de Mónaco ha dispuesto medidas concretas para evitar que ingresen y se establezcan en su territorio personas indeseables; en cuanto al ejercicio del control fronterizo, Mónaco aplica las disposiciones relativas a la entrada en el espacio Schengen y, así, no pueden entrar en su territorio personas enumeradas en el Sistema de Información de Schengen a los efectos de su inadmisibilidad.

Además, la estancia de nacionales extranjeros en Mónaco está supeditada al acuerdo previo de las autoridades de Francia; con arreglo al convenio entre Francia y Mónaco de 18 de mayo de 1963, en su forma enmendada, para expedir una tarjeta de residencia a un extranjero se necesita consultar previamente a las autoridades de Francia. Si ellas se opusieran a que un extranjero se estableciera en Mónaco, no se expide la tarjeta de residencia al interesado.

Por último, a raíz de los atentados perpetrados el 11 de septiembre de 2001, la Dirección de Seguridad Pública de Mónaco recibió instrucciones en el sentido de que reforzara los controles fronterizos en el marco del plan VIGIRENFORT. Este dispositivo prevé asimismo reuniones periódicas de intercambio de información sobre prevención del terrorismo y lucha contra el terrorismo, presididas por el Consejero del Gobierno para Asuntos Internos y en las que participan autoridades de diversos servicios del Estado (la Dirección de Servicios Judiciales, la Dirección de Seguridad Pública, el SICCFIN y el Departamento de Obras Públicas). La Dirección de Seguridad Pública transmite la información reunida en el Principado de Mónaco a los servicios de policía de otros países a los que pueda interesar en el marco de la red INTERPOL.

#### **Párrafo 2 c) y d) de la resolución 1373**

*“El Consejo de Seguridad,*

*...*

*2. Decide también que todos los Estados:*

*...*

c) Denieguen refugio a quienes financien, planifiquen o cometan actos de terrorismo, presten apoyo a esos actos o proporcionen refugio;

d) Impidan que quienes financien, planifiquen, faciliten o cometan actos de terrorismo utilicen sus territorios respectivos para estos fines, en contra de otros Estados o de sus ciudadanos;”

*Sírvase indicar en qué circunstancias están obligadas por ley las autoridades de Mónaco a no dar a un presunto terrorista autorización para ingresar en el territorio nacional o establecerse en él. Sírvase dar ejemplos pertinentes, de haberlos.*

Las autoridades de Mónaco tienen en todas las circunstancias la facultad discrecional de denegar el ingreso al territorio del Principado o la residencia en él a un extranjero considerado indeseable; así, pues, toda persona respecto de la cual haya sospechas de terrorismo será sistemáticamente expulsada del territorio nacional (artículo 22 de la Ordenanza No. 3.153, relativa a las condiciones de ingreso y residencia de extranjeros en el Principado).

#### **Párrafo 2 e) de la resolución 1373**

*“El Consejo de Seguridad,*

*...*

2. *Decide también* que todos los Estados:

*...*

e) Aseguren el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos actos y aseguren que, además de cualesquiera otras medidas de represión de esos actos que se adopten, dichos actos de terrorismo queden tipificados como delitos graves en las leyes y otros instrumentos legislativos internos y que el castigo que se imponga corresponda a la gravedad de esos actos de terrorismo;”

1. *¿Qué medidas hay en vigor para prevenir y reprimir actos cometidos por organizaciones terroristas que operen desde Mónaco (a fin de recaudar fondos, por ejemplo), pero para fines que probablemente no redunden en perjuicio de los intereses de Mónaco?*

Los actos de financiación del terrorismo cometidos en Mónaco son sancionados aunque no redunden en perjuicio de los intereses del Principado) (artículos 4 y 5 de la Ordenanza Soberana No. 15.320, de 8 de abril de 2002).

2. *Varios convenios y convenciones internacionales relativos a la prevención y represión del terrorismo dan competencia facultativa para conocer de los delitos previstos en ellos cuando sean cometidos en ciertas circunstancias (artículo 8 4) del Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares, artículo 6 2) del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, artículo 3 2) del Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental y artículo 6 2) del Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas con bombas). ¿Ha decidido Mónaco establecer su jurisdicción para conocer de los delitos a que se refieren esas disposiciones?*

En las disposiciones a que se hace referencia en esta pregunta se invita a cada Estado parte en esos convenios a establecer su jurisdicción respecto de los delitos indicados en ellas, especialmente cuando:

- El delito es cometido contra uno de sus nacionales (o cuando, en el curso de su comisión, un nacional del Estado es recluido, amenazado, herido o muerto): según el principio general enunciado en el artículo 9 1) del Código de Procedimiento Penal, podrá ser aprehendido y procesado en Mónaco el extranjero que sea culpable de la comisión fuera del territorio del Principado de un crimen o delito cuya víctima sea nacional de Mónaco. Si el crimen contra un monegasco es cometido en territorio nacional, con mayor razón el autor será procesado y sancionado en Mónaco en aplicación del principio general de territorialidad de la ley.
- El delito es cometido contra una de sus instalaciones públicas emplazadas fuera de su territorio, con inclusión de la embajada o de los locales diplomáticos o consulares: el atentado que tenga por objetivo causar devastación, matanzas o saqueo en territorio de Mónaco está sancionado en el artículo 65 del Código Penal; además, el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal faculta para procesar y sancionar en Mónaco a un extranjero que haya cometido fuera del territorio del Principado un atentado contra la seguridad del Estado, esto es, de un crimen o un delito contra agentes o locales diplomáticos o consulares de Mónaco.
- El delito sea cometido por un apátrida que resida habitualmente en el territorio de ese Estado: en aplicación del principio general de la territorialidad de la ley penal se puede procesar a los apátridas que tengan residencia habitual en Mónaco.
- El delito sea cometido con el objetivo de obligar a ese Estado a realizar o no realizar un determinado acto: los actos criminales o delictivos de que se trata corresponden normalmente a una de las tipificaciones antes mencionadas, ya sea directamente o a título de complicidad.
- El delito sea cometido a bordo de una aeronave del Gobierno del Estado parte: en el caso en que el Gobierno de Mónaco tuviera directamente a su cargo la explotación de una aeronave o una línea aérea, la aeronave debería estar registrada en Mónaco lo que haría aplicable el Convenio de Tokio de 14 de septiembre de 1963, cuya aplicación es obligatoria en Mónaco en virtud de la Ordenanza Soberana No. 7.963, de 24 de abril de 1984, según la cual las cortes y los tribunales del Estado de registro de la aeronave serán competentes para conocer de los actos y delitos cometidos a bordo.
- En cuanto al Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares, el Estado parte debe establecer su competencia a fin de conocer de los delitos previstos en ese Convenio cuando participe en una actividad de transporte nuclear internacional en calidad de exportador o importador de material nuclear; habida cuenta de que Mónaco no tiene estructura alguna de transformación, almacenamiento o retiro de material nuclear en el sentido del Convenio, no ha procedido jamás a importar y, *a fortiori*, exportar materiales nucleares y no tiene la intención de hacerlo en el futuro.

**Párrafo 2 f) de la resolución 1373**

*“El Consejo de Seguridad,*

*...*

2. *Decide también* que todos los Estados:

*...*

f) Se proporcionen recíprocamente el máximo nivel de asistencia en lo que se refiere a las investigaciones o los procedimientos penales relacionados con la financiación de los actos de terrorismo o el apoyo prestado a éstos, inclusive por lo que respecta a la asistencia para la obtención de las pruebas que procedan y que sean necesarias en esos procedimientos;”

*La existencia de un acuerdo bilateral, ¿es requisito previo para que Mónaco ofrezca asistencia judicial a otros países según lo dispuesto en este apartado?*

No es necesario que haya un acuerdo bilateral o multilateral para poner en práctica las medidas de asistencia recíproca judicial en materia penal (véanse los artículos 203 a 206 del Código de Procedimiento Penal).

En cuanto a la información financiera, el SICCFIN, con arreglo al artículo 29 de la Ley No. 1.162, en su forma enmendada, proporciona información a sus homólogos a reserva de reciprocidad. Se han concertado también acuerdos bilaterales permanentes con varios países (Francia, Bélgica, España, Portugal, Luxemburgo, Gran Bretaña, Suiza, Panamá) para intercambiar información relativa a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

### **III. Medidas adoptadas en aplicación del párrafo 3 de la resolución 1373**

**Párrafo 3 a) y b) de la resolución 1373**

*“El Consejo de Seguridad,*

*...*

3. *Exhorta* a todos los Estados a:

a) Encontrar medios para intensificar y agilizar el intercambio de información operacional, especialmente en relación con las actividades o movimientos de terroristas individuales o de redes de terroristas; los documentos de viaje alterados ilegalmente o falsificados; el tráfico de armas, explosivos y materiales peligrosos; la utilización de tecnologías de las comunicaciones por grupos terroristas y la amenaza representada por la posesión de armas de destrucción en masa por parte de grupos terroristas;

b) Intercambiar información de conformidad con el derecho internacional y la legislación interna y cooperará en las esferas administrativas y judiciales para impedir la comisión de actos de terrorismo;”

*Sírvase explicar en qué consisten los “obstáculos jurídicos o burocráticos” que Mónaco se propone levantar para poner en vigor lo dispuesto en estos dos apartados.*

No existe en Mónaco ningún obstáculo jurídico o burocrático en la materia (véase la respuesta relativa al párrafo 2 b)). La referencia a la necesidad de reducir o simplificar obstáculos que se mencionaba en el informe inicial de Mónaco se refería a la forma en que el país podía aprovechar el apoyo de Europol a las distintas unidades nacionales por conducto de la transmisión rápida de información que les concerniera. Esta comunicación se detallaba entonces de la siguiente manera: *“transmisión simplificada y protegida de datos, incluso de carácter personal, reducción de los obstáculos jurídicos o burocráticos, simplificación de los procedimientos de investigación”*.

### **Párrafo 3 c) de la resolución 1373**

*“El Consejo de Seguridad,*

...

3. *Exhorta* a todos los Estados a:

...

c) Cooperar, en particular mediante acuerdos y convenios bilaterales y multilaterales, para impedir y reprimir los ataques terroristas, y adoptar medidas contra quienes cometan esos actos;”

*Además de los países enumerados en la respuesta relativa al párrafo 2 b) (Francia, Italia, Alemania, Bélgica y Australia), ¿con qué países ha concertado Mónaco acuerdos bilaterales de extradición y asistencia judicial recíproca?*

El Principado de Mónaco ha concertado oficialmente convenios de asistencia judicial recíproca o extradición (los convenios de extradición incluyen la asistencia judicial recíproca en materia penal) con 15 Estados (Francia, Italia, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, República Checa, República Eslovaca, España, Estados Unidos, Liberia, Reino Unido, Países Bajos, Rusia, Suiza).

Cabe recordar que la legislación monegasca no supedita la extradición o la asistencia judicial recíproca a la existencia de un acuerdo bilateral o multilateral. En la práctica, Mónaco coopera sin limitación alguna con el Estado que solicite asistencia judicial, especialmente en la ejecución de exhortos internacionales. Así, las solicitudes en la materia se atienden en forma inmediata y completa, exista o no un convenio bilateral con el país requirente.

### **Párrafo 3 d) de la resolución 1373**

*“El Consejo de Seguridad,*

...

3. *Exhorta* a todos los Estados a:

...

d) Adherirse tan pronto como sea posible a los convenios y protocolos internacionales relativos al terrorismo, inclusive el Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo, de 9 de diciembre de 1999;”

*El Comité contra el Terrorismo querría recibir un informe provisional acerca de los 12 convenios y protocolos internacionales relativos al terrorismo en que se indiquen:*

- Las medidas adoptadas por Mónaco para adherirse a los instrumentos en los que no sea aún parte; y
- Los progresos realizados en la promulgación de leyes y la adopción de las demás disposiciones necesarias para aplicar los instrumentos en que es parte.

Después de presentado el informe inicial de Mónaco, entraron en vigor a su respecto tres instrumentos internacionales relativos a la represión del terrorismo. Se trata de:

- El Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, firmado y ratificado el 10 de noviembre de 2001 y que tiene fuerza ejecutoria en el Principado en virtud de la Ordenanza Soberana No. 15.319, de 8 de abril de 2002, que fijó el 10 de abril de 2002 como fecha de entrada en vigor del Convenio;
- El Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima y el Protocolo para la represión de los actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, cuyos instrumentos de adhesión fueron depositados el 25 de enero de 2002 y que tienen fuerza ejecutoria en el Principado en virtud de las Ordenanzas Soberanas No. 15.322 y 15.323, de 8 de abril de 2002, en las que se fijó el 25 de abril de 2002 como fecha de entrada en vigor.

Por último, el Principado depositó el 27 de noviembre de 2002 su instrumento de adhesión a la Convención sobre la prevención y el castigo de los delitos contra las personas internacionalmente protegidas, incluidos los agentes diplomáticos, hecha en Nueva York el 14 de diciembre de 1973. Este instrumento internacional entrará en vigor respecto de Mónaco el 27 de diciembre de 2002, fecha en la cual como consecuencia, el Principado será parte en todos los convenios y convenciones internacionales de represión del terrorismo.

- El Gobierno de Mónaco ha tomado igualmente diversas iniciativas para promulgar leyes concretas destinadas a reprimir el terrorismo y su financiación. En particular, ha dictado las Ordenanzas Soberanas No. 15.320, sobre la represión de la financiación del terrorismo (véase la respuesta relativa al párrafo 1 b)) y 15.321, relativa al procedimiento de congelación de fondos a los efectos de la lucha contra el terrorismo (véase la respuesta relativa al párrafo 1 c), pregunta tres). Por último se ha promulgado la Ley No. 1.253, de 12 de julio de 2002, que modifica la Ley No. 1.162, de 7 de julio de 1993, y amplía su ámbito de aplicación a la lucha contra la financiación del terrorismo (véase la respuesta relativa al párrafo 1 a), pregunta 1).

**Disposiciones en proceso de preparación.** Además de las disposiciones ya vigentes y que se refieren más concretamente a la **financiación** del terrorismo, el Gobierno del Principado está dando los últimos toques a la preparación de un proyecto de ordenanza soberana relativas a las infracciones que guardan relación con determinados actos terroristas y en que se precisan las penas que permitirán sancionar esos delitos en forma más severa; las penas que podrán imponerse a los autores de diversos delitos enumerados en convenios de

represión del terrorismo internacional serán de 10 a 20 años de reclusión (salvo que en otras disposiciones penales se impongan penas más severas) y multa de 18.000 a 450.000 euros.

**Párrafo 3 e) de la resolución 1373**

*“El Consejo de Seguridad,*

...

3. *Exhorta* a todos los Estados a:

...

e) Fomentar la cooperación y aplicar plenamente los convenios y protocolos internacionales relativos al terrorismo, así como las resoluciones del Consejo de Seguridad 1269 (1999) y 1368 (2001);”

*Las infracciones a que se refieren los convenios y protocolos internacionales relativos al terrorismo ¿están comprendidas como delitos que dan lugar a la extradición en los tratados bilaterales en que Mónaco es parte?*

A partir de la entrada en vigor de los primeros tratados internacionales relativos al terrorismo, los convenios bilaterales de extradición concertados por el Principado de Mónaco no incluyen enumeraciones de delitos sino condiciones objetivas de gravedad de delitos de toda índole. Así, pues, esos convenios comprenden todos los delitos graves y, por lo tanto, todos los relacionados con el terrorismo.

**Párrafo 3 g) de la resolución 1373:**

*“El Consejo de Seguridad,*

...

3. *Exhorta* a todos los Estados a:

...

g) Asegurar, de conformidad con el derecho internacional, que el estatuto de refugiado no sea utilizado de modo ilegítimo por los autores, organizadores o patrocinadores de actos de terrorismo y que no se reconozca la reivindicación de motivaciones políticas como causa de denegación de las solicitudes de extradición de presuntos terroristas;”

*Según este apartado, los Estados deben cerciorarse de que “no se reconozca la reivindicación de motivaciones políticas como causa de denegación de las solicitudes de extradición de presuntos terroristas”. Sírvase explicar, habida cuenta de lo dispuesto en la ley No. 1.222, de 28 de diciembre de 1999, relativa a la extradición, cómo se propone Mónaco cumplir esta obligación en el caso de delitos distintos de los previstos en el Convenio Internacional para la represión de atentados terroristas con bombas.*

Para complementar las indicaciones ya presentadas en el informe inicial, respecto en particular de la Ordenanza Soberana No. 15.088, de 30 de octubre de 2001, relativa a la aplicación del Convenio de las Naciones Unidas para la represión de atentados con bombas, cabe precisar que la Ordenanza Soberana No. 15.320, de 8 de abril de 2002, relativa a la represión de la financiación del terrorismo, enumera en

su artículo 2 una lista de los actos de índole terrorista cuya financiación está sancionada. Según el artículo 11 de esa Ordenanza, la financiación de esos actos o la complicidad en ella no puede considerarse delito político.

Por lo tanto, el terrorismo y la financiación del terrorismo jamás pueden considerarse actos políticos que permitan no dar lugar a la extradición.

**Disposiciones en proceso de elaboración:** Uno de los artículos del proyecto de Ordenanza Soberana al que se hace referencia en relación con el párrafo 3 d) dispone que, en el marco de los delitos a que se refiera uno de los tratados internacionales enumerados en ella, el Principado de Mónaco suministrará la mayor asistencia judicial posible a las investigaciones, los procedimientos penales o los procedimientos de extradición.

#### **IV. Medidas adoptadas en aplicación del párrafo 4 de la resolución 1373**

*“El Consejo de Seguridad,*

...

4. *Observa con preocupación* la conexión estrecha que existe entre el terrorismo internacional y la delincuencia transnacional organizada, las drogas ilícitas, el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de armas y la circulación ilícita de materiales nucleares, químicos, biológicos y otros materiales potencialmente letales y, a ese respecto, pone de relieve la necesidad de promover la coordinación de las iniciativas en los planos nacional, subregional, regional e internacional para reforzar la acción internacional frente a este grave problema para la seguridad internacional y la grave amenaza que supone.”

*¿Ha adoptado medidas Mónaco para tener en cuenta las inquietudes expresadas en este párrafo de la resolución, además de las que se refieren a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada y a los Protocolos correspondientes, a que se hace referencia en relación con el párrafo 3 f)?*

El Gobierno del Principado es consciente de la interacción que existe entre el terrorismo internacional y la delincuencia transnacional organizada y el presente informe ha demostrado que, para propiciar la modernización de su dispositivo de lucha contra el blanqueo de drogas (que inicialmente tenía por cometido la lucha contra el blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, así como de la actividad de asociaciones delictivas), el Gobierno del Principado ha aprovechado esta ocasión para ampliar el ámbito de aplicación de la ley a la lucha contra la financiación del terrorismo.

Animado del mismo espíritu, el 24 de junio de 2002 procedió a la firma del Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada y que constituye a su juicio un instrumento fundamental en el marco del mecanismo convencional para luchar contra el terrorismo y la delincuencia internacionales. Ese Protocolo será ratificado a la mayor brevedad. Además, se está terminando un proyecto de ley que permitirá incorporar al derecho interno.



Por otra parte, en el ámbito de la cooperación judicial internacional en lo penal, el Principado procede sin reserva alguna a intercambiar información con los demás países y se distingue por la celeridad con que da curso a las distintas solicitudes que recibe; el plazo medio para la ejecución de los exhortos internacionales es de tres meses. Los servicios judiciales, cuando deben hacer una investigación de una persona o entidad implicada en un asunto que tenga vínculos con la delincuencia transnacional organizada, en particular sus formas más graves como el terrorismo internacional, el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero, el tráfico de armas o la transferencia ilegal de material nuclear, químico, biológico o de otra índole que represente un peligro mortal, la lleva a cabo en algunas horas cuando es un caso de urgencia y, por lo general, en menos de una semana. Además, los magistrados y los funcionarios de policía judicial extranjeros son autorizados sistemáticamente a asistir a las diligencias que efectúan el juez de instrucción o los oficiales de policía judicial de Mónaco y les es remitida de inmediato una copia certificada conforme del expediente de la diligencia.

## V. Otras preguntas

*Nueva solicitud: Sería posible para Mónaco presentar un organigrama del mecanismo administrativo, como las autoridades policiales, de control de inmigración, aduanas, impuestos de supervisión financiera, establecido para poner en práctica las leyes, los decretos y otros documentos que, según se considere, sirvan para cumplir la resolución?*

### • Ministerio del Interior

#### 1. Oficina del Consejero de Gobierno para asuntos internos

Hay un comandante superior de policía destinado permanentemente al Gabinete del Ministro del Interior y encargado de la coordinación y transmisión de información en materia de seguridad pública, especialmente en relación con la lucha contra el terrorismo.

#### 2. Dirección de Seguridad Pública

a) Una Sección de Información General está encargada de reunir las piezas de información confidencial que revistan interés para las autoridades, especialmente para la lucha contra el terrorismo.

b) La División de Control Aeroportuario ha visto reforzadas su función de control de las fronteras del Principado de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos de Schengen.

c) La División de Policía Judicial esta encargada de ejecutar las tareas que le delegue el poder judicial de Mónaco. Tiene a su cargo las relaciones con Interpol, de la que constituye una de las oficinas centrales nacionales. La División de Policía Judicial se hace representar periódicamente en las reuniones internacionales regionales organizadas por la Interpol, por una parte, y por grupos de coordinación de la lucha contra el terrorismo, por la otra.

d) La División de Policía Administrativa, encargada de tramitar las solicitudes de residencia en Mónaco, se cerciora de que los servicios especializados extranjeros no hayan indicado que el solicitante puede prestar asistencia a una empresa terrorista.

**• Dirección de Servicios Judiciales**

El Director de Servicios Judiciales “dirige la acción pública sin poder ejercerla por sí mismo ni detener o suspender su curso”. El Procurador General ejerce la acción pública, dirige la policía judicial y puede asignar al juez de instrucción la tramitación de los casos de mayor gravedad.

Existe una cooperación estrecha y eficaz entre la Dirección de Servicios Judiciales, la Procuraduría General y el Servicio de Información y Control sobre los Circuitos Financieros (SICCFIN).

**• Ministerio de Hacienda y Economía****1. *Servicio de Información y Control sobre los Circuitos Financieros – SICCFIN***

Este Servicio está encargado de:

- Los casos en que se sospeche la posibilidad de vínculos con el terrorismo, con actos terroristas o con organizaciones terroristas o con la financiación de éstos;
- La tramitación de las solicitudes presentadas por servicios extranjeros que tengan la misma competencia;

A estos efectos, el SICCFIN reúne, investiga, procesa y difunde información sobre los circuitos financieros de blanqueo de fondos.

- Cerciorarse de que los organismos financieros cumplan lo dispuesto en la Ley No. 1.162 en su forma enmendada, así como de que se adopten medidas para su ejecución, efectuando entre otras cosas controles in situ o de la documentación.

**2. *Dirección del Presupuesto y Tesoro***

Este servicio está encargado de:

- Recibir de establecimientos de crédito toda la información necesaria para cerciorarse de que se cumpla la obligación de congelar fondos;
  - Las relaciones con los organismos de supervisión de las instituciones de crédito (Comisión Bancaria);
  - Cuestiones jurídicas y estructurales relativas a la banca y las operaciones financieras;
  - La cooperación internacional en materia financiera.
-